

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**



**RAMA JUDICIAL**

**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**

**Medellín, diecinueve (19) de julio de dos mil veintidós (2022)**

La Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, integrada por los Magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES (ponente), MARIA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ y NANCY GUTIÉRREZ SALAZAR, cumplido el traslado de que trata el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, procede a dictar la sentencia que corresponde en este proceso ordinario instaurado por NASLY SUGEY CIFUENTES VALENCIA en nombre propio y de su menor hijo JUAN JOSÉ TAMAYO CIFUENTES en contra de la ADMINISTRADORA DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A (Radicado 05001-31-05-006-2017-00956-02).

**ANTECEDENTES**

Pretende la demandante se condene a Porvenir S.A al reconocimiento y pago de una pensión de sobrevivientes con ocasión de la muerte de su compañero permanente Javier Tamayo Londoño a partir del 12 de marzo de 2015 cuando ocurrió su muerte, con las correspondientes mesadas adicionales, los intereses de mora que contempla el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 o en subsidio la indexación y las costas procesales.

Como fundamento a sus pretensiones, narró que con Javier Tamayo Londoño existió una unión marital de hecho, de la que procrearon a Juan José, quien nació el 29 de julio de 2010. Javier Tamayo inició su vida laboral en enero de 2014 cotizando hasta febrero de 2015 un total de 59 semanas. El 12 de marzo de 2015 falleció por causas de origen común por lo que procedió a efectuar la

reclamación de la pensión de sobrevivientes en su nombre y el de su hijo, siendo negada por comunicación del 24 de enero de 2017 por aducir como origen de la muerte una causa profesional.

PORVENIR S.A dio respuesta al libelo dando razón a los hechos referidos al nacimiento del hijo, el número de semanas alcanzadas en el Fondo, el fallecimiento y la solicitud y negativa del derecho prestacional. Niega que la muerte del afiliado tenga causas de origen común ya que el evento se presentó en su lugar de trabajo, donde fue visto por última vez, prestación que aduce en ese sentido corresponde ser asumida por la ARL a la que el trabajador se encontraba afiliado. Como excepciones de mérito formuló las que denominó falta de causa para pedir, inexistencia de las obligaciones demandadas, cobro de lo no debido, prescripción y buena fe.

Dentro del trámite la sociedad demandada también formuló la excepción previa de falta de integración de la Litis por pasiva con la ARL y el empleador de Javier Tamayo Londoño, petición denegada en la etapa correspondiente de la audiencia celebrada el 16 de agosto de 2019 (fl. 111), confirmada por esta Sala de Decisión en providencia del 09 de septiembre de 2020 (fls. 119-121).

El 23 de abril de 2021 el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín profirió sentencia en la que DECLARÓ que la Nasly Sugely Cifuentes y su hijo Juan José Tamayo Cifuentes acreditaron la condición de beneficiarios de la pensión de sobrevivientes causada por el fallecimiento de Javier Tamayo Londoño. CONDENÓ a PORVENIR S.A a pagar a la demandante la suma de \$60.442.064 por concepto de retroactivo pensional calculado entre el 12 de marzo de 2015 y el 30 de marzo de 2021, debiendo continuarse pagando a partir de abril de 2021 una mesada pensional en razón del SMLMV sin perjuicio de las deducciones del 12% con destino al Sistema de Salud, con la advertencia que en el momento de cesar el derecho del hijo, la prestación se acrecentará a la compañera en un 100%. CONDENÓ a pagar los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 a partir del 25 de enero de 2017 y hasta el cumplimiento de la sentencia. CONDENÓ a PORVENIR S.A en costas, fijando por agencias en derecho la suma de \$4.500.000.

El mandatario judicial de la convocada disiente plenamente de la decisión, insistiendo que el deceso del afiliado tiene causas de origen profesional por ocurrir mientras desempeñaba sus funciones dentro del horario laboral, por lo que la prestación pedida está en cabeza de la correspondiente ARL. Señaló que por iguales razones no resultan procedentes los intereses de mora condenados, por lo que solicita la revocatoria de la decisión para en su lugar absolver a su representada de las pretensiones de la demanda.

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

### CONSIDERACIONES

No es tema de discusión en esta sede, que el señor Javier Tamayo Londoño se encontraba afiliado a Porvenir S.A en calidad de trabajador dependiente, habiendo cotizado entre enero de 2014 cuando se materializó su vinculación (fl.86), y hasta el 12 de marzo de 2015 data en la que ocurrió la muerte (fl.17) 59 semanas (fl.16), dejando causado el derecho pensional a sus beneficiarios Nasly Sugey Cifuentes Valencia como compañera permanente y Juan José Tamayo Cifuentes en su calidad de hijo (fl.13).

De cara a lo anterior, y atendiendo los argumentos de la alzada, el problema jurídico a resolver por esta Sala de Decisión se circunscribe a establecer, si contrario a lo resuelto por la *A quo*, el infortunio en el que perdió la vida el causante es de origen laboral que desligue a la AFP demandada del reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a que tienen derecho su compañera permanente e hijo, para que una vez definido ello, se analice acorde a la sentencia emitida por el operador inicial la procedencia de imponer los intereses moratorios.

Pues bien, para resolver el asunto se tiene que conforme al artículo 12 del Decreto 1295 de 1994, “*toda enfermedad o patología, accidente o muerte, que*

*no hayan sido clasificados o calificados como de origen profesional, se consideran de origen común*” (CSJ SL, 19 feb. 2002, rad. 17429, CSJ SL, 4 jul. 2007, rad. 29156 y CSJ SL2582-2019), presunción que solo se desvirtúa previa calificación del accidente en la que se establezca el nexo de causalidad entre la actividad y las circunstancias del deceso, siendo el juez laboral competente para calificar la naturaleza del accidente (Ver SL183-2021).

Al respecto, la AFP asegura que el hecho fatídico era de origen laboral, por cuanto ocurrió en el entorno propio de su labor, dentro del turno de trabajo según información plasmada por la demandante en el formulario de solicitud de sobrevivencia para cónyuge e hijos (fl.92), por lo que si la administradora del fondo de pensiones pretendía refutar lo pretendido por la actora, le incumbía acreditar que la muerte del afiliado fue de origen laboral.

Por comunicación del 27 de septiembre de 2016 (fl. 89) tal Administradora informó a la solicitante de la prestación, la necesidad de elaborar una calificación de origen del siniestro por ser posiblemente el deceso producido en consecuencia de un accidente de trabajo. Ya el 24 de enero de 2017 (fl.90-91) fue enterada que mediante calificación emitida por el Grupo Interdisciplinario de Calificación de Pérdida de Capacidad Laboral y origen de Seguros de Vida Alfa, se determinó el accidente que dio lugar a la muerte del señor Tamayo Londoño como de origen profesional, valoración que valga decir, brilla por su ausencia en el plenario además de otra experticia que de razón con base técnica a los argumentos de oposición de la Administradora demandada.

Bajo ese panorama, y toda vez que no existe prueba solemne, estando dentro de la órbita de competencia del Juez Laboral, habrá de establecerse con base a las probanzas arribadas si en efecto, el evento que conllevó a la muerte del afiliado desvirtúa la presunción legal del origen común.

Al efecto, es pertinente y, además, necesario traer a colación la sentencia SL4581-2021, en la que al memorarse la SL11970-2017, reseña lo que sigue:

*“En un caso similar, la Corporación reiteró que: (i) para que se presente un accidente laboral, debe existir un nexo causal entre el hecho dañoso y la prestación del servicio, ya sea de manera directa o indirecta; (ii) que si la administradora de riesgos laborales pretende liberarse de su responsabilidad, debe derruir tal conexidad, y (iii) no todo hecho que ocurra en el entorno laboral, resulta dable calificarlo siempre como accidente de trabajo, por cuanto pueden existir circunstancias que permitan desligarlo de la prestación de un servicio subordinado” (Ver también SL1251-2022).*

Bajo igual matiz, la providencia SL1730-2020 dijo que: *“la responsabilidad que se establece al empleador frente a los infortunios que ocurren en su esfera, o la administradora de riesgos laborales que asume ese mismo riesgo, es objetiva; y que la causalidad que debe haber entre el siniestro y la actividad laboral contratada, puede ser directa (con causa del trabajo) o indirecta (con ocasión del trabajo), y que no se rompe por un hecho del trabajador, de un tercero o por fuerza mayor o caso fortuito”, explicando que “el accidente que ocurre con causa del trabajo, se refiere a una relación directa derivada del desarrollo de la labor para la cual se contrató al trabajador y las actividades relacionadas con la misma; mientras que con ocasión del trabajo, plantea una causalidad indirecta, es decir, un vínculo de oportunidad o de circunstancias, entre el hecho y las funciones que desempeña el empleado”.*

A partir de esos derroteros, esta colegiatura acude a los anexos documentales del escrito inicial de demanda de donde se extrae que Javier Tamayo Londoño ingresó a la fiscalía el 15 de marzo de 2014 como N.N (fl.20), entidad que certificó haber sido hallado el 14 de marzo de 2015 en avanzado estado de descomposición, determinando que la muerte pudo ocurrir dentro de las 48 y 72 horas antes, tomándose como posible fecha del deceso el 12 de marzo de 2015, siendo la razón de la muerte *“estrangulamiento manual”* (fl.21).

A más de lo anterior, tanto la actora al absolver su interrogatorio de parte como los testigos Diego Alonso Tamayo Restrepo y Stheffany Galaxia López Vivares señalaron desconocer incluso a la fecha de sus deponencias, las circunstancias que rodearon el hecho violento que dio paso a la muerte del causante, donde pudieron únicamente asegurar que la última conversación con él sostenida se dio estando en la finca "*San Miguel*" en donde se encontraba solo y en la que fungía como cuidador, jardinero y mayordomo, catalogando Nasly Sugey Cifuentes las condiciones en que se dio el evento desafortunado, como inciertas.

En esa dirección, no es acertado dar razón a la teoría planteada por la parte opositora, en tanto, además de no bastar con que el accidente ocurra en el lugar o en la jornada laboral, sino que debe tener un nexo de causalidad con el trabajo, ninguna de las pruebas obrantes en el proceso, evidencian o acreditan que el fallecimiento del señor Tamayo Londoño, se dio en su lugar de trabajo, o hubiera estado motivado por las labores propias que desarrollaba, con ocasión de la ubicación de dicho trabajador, o que el sitio de prestación de servicios haya sido determinante para que fuera ultimado, sin que se cuente con apoyo investigativo, técnico o de cualquier índole para atribuir el deceso a un acto derivado de la función de cuidador del lugar como lo pretende hacer ver quien apodera a la demandada, ni es dable basar en suposiciones lo que en efecto pudo ocurrir cuando sobrevino su desaparecimiento.

Por el contrario, es plenamente desconocido incluso para las autoridades judiciales que investigan la comisión del delito, el momento, el modo y el lugar en los que se cometió el homicidio, siendo difícil apuntar a que estaba o no en horas de trabajo, porque aun cuando se afirmó por los testigos que tenía un contrato interno y fijo, no tiene asidero argüir que el horario era de 24 horas por los 6 días a la semana y con base a ello dar por acreditado el nexo causal, además de ser hallado el cuerpo en un lugar que no corresponde al de sus labores tres o cuatro días después de ser visto por última vez, por lo que mal podría concluirse sin fundamento y apoyo probatorio alguno que entre el hecho dañoso y el servicio o trabajo desempeñado por Javier Tamayo existió una

íntima relación de causalidad directa o indirecta, resultando imposible determinar si en ese instante se encontraba ejerciendo su actividad laboral o si estaba por fuera de la órbita del riesgo laboral por circunstancias personales o ajenas a su fuerza de trabajo.

Bajo tales reflexiones, es patente que los medios de convicción no revelan que la ocurrencia del accidente tenga origen profesional en los términos que se plantearon al inicio de esta providencia, por lo que ha de entenderse y así lo hace esta Sala de Decisión, que la presunción contenida en el artículo 12 del Decreto 1295 de 1994 no fue derruida, recayendo las prestaciones económicas a que hay lugar por el riesgo de muerte en la Administradora de Fondo de Pensiones a la que se encontraba afiliado el fallecido, que no es otra que la AFP Porvenir S.A.

Sobre los intereses de mora deprecados, debe partirse del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, el cual establece que en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales o el no pago de mesadas dentro del plazo previsto en la ley para el otorgamiento de la pensión, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago.

Para determinar la procedencia de dicho gravamen, dada su naturaleza resarcitoria, debe analizarse la conducta de la administradora en el retardo o negación del reconocimiento o pago de la pensión, ya que, en el evento de demostrarse que su proceder tiene respaldo en las normas que en un comienzo regulaban la situación, su postura proviene de la aplicación minuciosa de la ley sin el alcance que puedan darle los jueces, sin intervención de situación que le son imposibles de predecir, o cuando el reconocimiento de la pensión obedece a la creación de criterio jurisprudencial, debe exonerársele de los intereses de mora (SL704 de 2013, SL7893-2015 y SL2786 de 2020).

Bajo las anteriores previsiones, se tiene que Porvenir S.A tiene a su cargo los intereses moratorios pretendidos, por cuanto es patente que no se está frente a ninguno de los postulados enunciados para ser exonerada de su reconocimiento, resultando evidente la tardanza en el otorgamiento de una prestación a un menor de edad y una compañera con indudable acreditación de sus calidades de beneficiarios, basándose en un fundamento técnico que al parecer no existió, pues de ser así, se hubiera constituido en la probanza principal dentro de este trámite judicial por servir de soporte probatorio a las excepciones y argumentos del recurso de la pasiva, por lo que aun con conocimiento de la presunción legal que se aplica en estos casos sin contar con los medios suficientes para desatenderla, se emite una negativa que se traduce en un acto negligente frente a los interesados sin justificación atendible.

Conforme a todo lo expuesto, y en síntesis, se confirmará la decisión objeto de alzada por encontrar ajustado a las prerrogativas normativas y jurisprudenciales el derecho a la pensión de sobrevivientes concedido con el correlativo reconocimiento de intereses moratorios a cargo de la demandada AFP PORVENIR S.A. por tratarse bajo la presunción de ley, de un accidente de origen común.

Conforme a lo pregonado en el artículo 365-1 del CGP en esta instancia las costas procesales son a cargo de la demandada. Se fijan las agencias en derecho en la suma de \$1.200.000.


#### **DECISIÓN:**

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala cuarta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **CONFIRMA** la sentencia apelada, de fecha y procedencia conocidas. Las costas en esta sede son a cargo de la demandada, se fijan las agencias en derecho en la suma de \$1.200.000.



Notifíquese la presente decisión por EDICTO (num.3°, lit. d., art. 41 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social en concordancia con el auto 550-2021 CSJ).

Los Magistrados,



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ



NANCY GUTIERREZ SALAZAR

**REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
SALA LABORAL**



**SECRETARÍA**

**EDICTO**

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

**HACE SABER:**

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

**Radicación:** 05001310500620170095601  
**Proceso:** Ordinario  
**Demandante:** NASLY SUGEY CIFUENTES VALENCIA  
**Demandado:** PORVENIR S.A  
**M. P.** CARLOS ALBERTO LEBRUN MORALES  
**Fecha de fallo:** 19/07/2022  
**Decisión:** CONFIRMA

El presente edicto se fija por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 21/07/2022 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

**RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS**

Secretario